

El componente **antisindical** del terrorismo de Estado



El componente antisindical del terrorismo de Estado

Cieza, Daniel

El componente antisindical del terrorismo de Estado. - 1a ed. - Buenos Aires : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos, 2012.

40 p. ; 27x19 cm. - (Cuadernos del Archivo Nacional de la Memoria; 3)

ISBN 978-987-1407-42-2

1. Terrorismo de Estado. I. Título.

CDD 321.9



**Cuadernos del Archivo Nacional
de la Memoria**

Presidente

Ramón Torres Molina

Secretario Ejecutivo

Carlos Lafforgue

Coordinadora Ejecutiva

Judith Said

Cuaderno N° 3 – El componente
antisindical del terrorismo de Estado

Este trabajo fue elaborado por
Daniel Cieza, consultor de la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Este documento es una versión ampliada
de la ponencia presentada en el
II Congreso Internacional de Relaciones
del Trabajo, Buenos Aires, 2011.

Edición, diseño y diagramación
Área de Publicaciones
Secretaría de Derechos Humanos

ISBN 978-987-1407-42-2

1000 ejemplares

Av. del Libertador 8151
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1ª edición: mayo de 2012

El componente antisindical del terrorismo de Estado

Presentación	5
Introducción	7
El debate sobre el modelo político-cultural y las prácticas genocidas	9
Primera fase de una cronología trágica	13
Dirigentes sindicales víctimas de la dictadura cívico-militar	16
Represión en los lugares de trabajo: delegados y activistas sindicales víctimas y responsabilidad de civiles	20
Reglas estatales dictadas por la última dictadura en materia sindical	22
La investigación sobre la represión antisindical ..	24
Conclusiones	26
Propuestas y políticas públicas	28
Bibliografía	29
Fuentes documentales y archivos digitales	31
Anexo: Actuación sindical y política de los principales dirigentes asesinados o desaparecidos	32

Presentación

El Archivo Nacional de la Memoria preserva información, testimonios y documentos necesarios para estudiar el condicionamiento y las consecuencias de la represión ilegal y el terrorismo de Estado en la Argentina.

El documento que se publica, elaborado por el consultor de la Secretaría de Derechos Humanos Daniel Cieza, abogado, sociólogo, docente e investigador del Centro de Estudios e Investigaciones en Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, constituye un aporte para el análisis de lo que el autor llama “el componente antisindical del terrorismo de Estado”.

En este trabajo se presenta una cronología que incluye el asesinato o la desaparición forzada de unos cincuenta dirigentes sindicales entre mediados de 1974 y fines de 1983, junto a un anexo con los datos biográficos de algunas de las víctimas.

Cabe señalar que en esos años los dirigentes sindicales tenían un fuero especial conforme a la ley 20.615, y que algunos de los asesinados o desaparecidos, además de su labor sindical, ocuparon importantes cargos públicos, tanto en los poderes ejecutivos como legislativos, en el ámbito nacional y provincial.

La represión contra dirigentes sindicales motivó denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las juntas militares se negaron a asumir cualquier responsabilidad, lo que originó intimaciones de organismos internacionales para que se esclarecieran los asesinatos y desapariciones en un tiempo perentorio.

A partir de 2003, el Estado argentino, encabezado en su momento por Néstor Kirchner y actualmente por Cristina Fernández, está cumpliendo con el deber jurídico de investigar hasta las últimas consecuencias las prácticas antisindicales del terrorismo de Estado. En diversos juicios, que aún se desarrollan en todo el país, se ha establecido ya la responsabilidad de miembros de las fuerzas de seguridad o de grupos paraestatales en la desaparición o asesinato de dirigentes sindicales.

Algunos familiares y compañeros de trabajo de las víctimas también han denunciado la participación de civiles en los hechos delictivos en perjuicio de dirigentes sindicales, lo que se está investigando en el ámbito judicial y es objeto de debate en ámbitos de organizaciones de derechos humanos en la actualidad.

Esta investigación es una contribución sustantiva para el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la verdad y la justicia, y constituye uno de los primeros trabajos que ofrecen un panorama del conjunto de las víctimas con cargos sindicales. Sin embargo, los datos son necesariamente incompletos, ya que la reconstrucción de la memoria histórica es un largo proceso, y por lo tanto, éstos deben ser tomados como insumos para nuevas investigaciones.

Archivo Nacional de la Memoria

Introducción

Se ha caracterizado con justeza, tanto en el mundo académico como en el judicial, que la Argentina sufrió a partir de 1974 una experiencia genocida. Existió un plan sistemático para eliminar una parte de la sociedad civil con el fin de reestructurar las relaciones sociales y modificar identidades arraigadas (Feierstein, 2007).

Hoy se acepta que los “blancos” del proceso genocida no fueron solamente jóvenes insurgentes considerados “subversivos”. Uno de los objetivos principales del terrorismo de Estado fue acabar con la Argentina “nacional y popular”, que era percibida como una combinación de nacionalismo en lo económico, intervencionismo estatal y una fuerte presencia sindical.

En este marco, la hipótesis de este trabajo es que un intento de modificar el modelo y la cultura sindical argentina constituyó lo que podríamos denominar el componente antisindical del genocidio.

Este modelo sindical argentino se distinguía por la existencia de sindicatos centralizados y fuertes, cuyos representantes accedían a cargos políticos en parlamentos, gobiernos y empresas del Estado; que controlaban aspectos del sistema de protección social, como los seguros de salud, y sostenían una ideología nacionalista y con algunos rasgos “antipatronales”.

Hacia 1970, la estructura sindical argentina se caracterizaba por una tasa de afiliación elevada, por un gran poder económico derivado de la administración de las obras sociales, y por una fuerte implantación en los lugares de trabajo a partir de delegados y subdelegados de sección. Exhibía, además, una gran trayectoria en encabezar conflictos sindicales de alcance nacional, ya que a lo largo del siglo XX se verificaba un promedio de dos huelgas o paros nacionales por año (Cieza, 2000).

Había tres corrientes: la ortodoxa, representada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las 62 Organizaciones peronistas; la CGT de los Argentinos, que expresaba una mayor combatividad y una visión nacionalista-revolucionaria; y la clasista, presente en algunos sindicatos de empresa y en algunas seccionales del interior de la CGT.

El terrorismo de Estado intentó reformar toda la estructura sindical y golpeó a sus distintas corrientes. Más allá de algunas afinidades con dirigentes sindicales o gremios aislados, el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” afectó al sindicalismo en su conjunto. Este proyecto genocida, de naturaleza cívico-militar, tuvo dos conducciones: la cúpula de las Fuerzas Armadas y ciertos sectores del empresariado. Empezó a operar desde mediados de 1974, a través de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y otras fuerzas parapoliciales y, luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976, intensificó su accionar a través de las fuerzas armadas y de seguridad. O sea que existieron dos períodos nítidos en el proceso represivo: julio de 1974 a marzo de 1976 y marzo de 1976 hasta fines de 1983. En la primera etapa, los asesinatos de sindicalistas pueden generar algunas dudas porque hubo pugnas político-sindicales entre las distintas corrientes y no todos los hechos de violencia tuvieron origen en estructuras estatales o paraestatales. En el segundo momento no existen dudas sobre los victimarios.

Un análisis de los dirigentes sindicales, es decir, de los miembros de comisiones directivas de sindicatos, asesinados o detenidos-desaparecidos durante el terrorismo de Estado, de sus antecedentes y de las circunstancias de su muerte o desaparición, podría aportar elementos sobre la hipótesis planteada.

Para ello, se trabajó con una nómina de alrededor de cincuenta víctimas que, según los datos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), del Registro de Fallecidos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y de distintas listas publicadas por organismos públicos o entidades de derechos humanos, al momento de su desaparición ostentaban cargos sindicales o los habían tenido en el período previo.

La gran mayoría de los casos están asentados en la Conadep. Sin embargo, algunos casos como los de los dirigentes sindicales Ángel Vázquez (Alimentación) y Alberto Bayarsky (Vialidad Nacional), están registrados por organismos locales y subsisten algunas dudas acerca de los victimarios. Se ha verificado el carácter de víctima de todos los mencionados mediante numerosas entrevistas realizadas en todo el país.

La investigación también incluye a los trabajadores asesinados o detenidos-desaparecidos en el período en estudio que, según la denuncia presentada por sus familiares, o datos posteriores surgidos de actuaciones judiciales o de diversas iniciativas de organismos de derechos humanos, tenían como antecedente haber participado en actividades de distintos gremios, ya sea como delegados, integrantes de “listas” sindicales, o como simples “activistas”. De esta forma, también se pone a prueba la hipótesis de trabajo.

Finalmente, se analizan las reglas estatales que impulsó la dictadura cívico-militar para modificar el modelo sindical vigente en aquellos años.

El debate sobre el modelo político-cultural y las prácticas genocidas

En la Argentina hubo, en las últimas décadas, un fuerte debate –que todavía está abierto– sobre el modelo político-cultural más apropiado. Si se observa a la sociedad moderna como una “configuración cultural”, en su interior hubo –y lo hay todavía– un intenso debate sobre el mejor rumbo a seguir. En forma simplificada, se puede decir que hay dos tradiciones: la nacional-popular y la liberal.

Para un sector mayoritario de la población, el camino correcto era el “nacional y popular”, representado simbólicamente por figuras como Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón.

En su *Actualización política y doctrinaria para la toma del poder*, elaborada en 1971, el general Perón defendía la “la línea nacional” como una posición independiente de las potencias hegemónicas:

Y en nuestro país la línea nuestra es la línea, diremos, de la Primera Junta, que era independentista. De Rosas que defendió eso, de Irigoyen, que fue otro hombre que también defendió eso. Y de Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido, de una manera directa o indirecta. De manera que todo esto tiene una continuidad histórica, porque los países están viviendo el reflejo del resto del mundo.

Hacia 1973, se puso en marcha el “modelo nacional”, encabezado por Juan Domingo Perón. El anciano líder se impuso con más del 60% de los votos. El “modelo nacional” se basaba en las tres banderas justicialistas y en una “tercera posición”. Decía Perón:

Las banderas de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política son inamovibles, por lo menos por un largo período de nuestra historia serán inamovibles. Luchamos por eso, esas banderas son tomadas por las nuevas generaciones que las prolongan en el tiempo¹.

¹ Perón, Juan Domingo, *Actualización política y doctrinaria para la toma del poder*. Pevuel Ediciones, Buenos Aires, 1971.

Uno de los componentes principales de este modelo era una determinada estructura sindical que fue considerada, hacia los años 70, como su “columna vertebral” (Abós, 1983). La idea central del peronismo con respecto a la función de los trabajadores en la vida nacional está contenida en el mensaje de Perón a la Asamblea Legislativa del 1º de mayo de 1974, en el que sostuvo que los trabajadores eran la columna vertebral del proceso de cambio y que se estaban organizando para que su participación trascendiera largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo. Pero, a su vez, Perón les exigía capacitación intensa para la tarea de instaurar la justicia social.

En efecto, el sindicalismo cumplía diversas funciones: una reivindicativa general, una función reivindicativa en la empresa, una político-institucional, una político-partidaria y una función asistencial. Los gremios, en 1973 y 1974, celebraban pactos o acuerdos salariales, como el Pacto Social, en nombre de siete millones de trabajadores; reclamaban a nivel de las empresas sobre salarios y condiciones de trabajo; ocupaban, a través de sus dirigentes, cargos en los poderes ejecutivos y legislativos nacionales, provinciales y municipales, y en los directorios de empresas del Estado; participaban activamente en los partidos políticos, en especial en el Partido Justicialista, donde expresaban una “rama”, pero también en otros partidos, donde el dirigente sindical era muy valorado y, finalmente, dirigían importantes segmentos del sistema de protección social, como el seguro social o de salud, programas de viviendas sociales, turismo popular, cursos de capacitación, actividades de recreación, etcétera.

Esta forma de concebir el sindicalismo formaba parte de una cultura de época y estaba arraigada en la mayoría de la población. No estaba exenta de contradicciones y se caracterizaba por cierta heterogeneidad (James, 2010). Había diversas corrientes en el sindicalismo, que se autodenominaban “ortodoxos”, “combativos” y “clasistas” y que se enfrentaron duramente entre sí. Sin embargo, hasta los sectores más críticos de la “burocracia sindical” o del autoritarismo de ciertos dirigentes, planteaban “la recuperación sindical”².

En oposición a este modelo, un sector minoritario planteó en forma permanente un rumbo distinto. El relato era totalmente opuesto. El camino sería perseverar en el rumbo fijado por la Generación del 80. El advenimiento del peronismo y el peso de los gremios significarían un gran retroceso histórico; la tradición liberal es antiperonista y antisindical. Dijo uno de sus representantes, gran empresario y dirigente de entidades patronales:

(...) La sublevación militar del 6 de septiembre de 1930 con el General Uriburu al frente, integrada por oficiales nacionalistas proclives al fascismo italiano, constituye el primer intento de romper con la concepción política que puso en marcha la Generación del 80, pero felizmente el General Justo, sucesor de Uriburu en la presidencia de la Nación, líder indiscutido del

² Dentro del sindicalismo convivían: un sector “ortodoxo”, que dominaba los grandes sindicatos; un sector “combativo”, que cuestionaba la “burocracia”; y un sector “clasista”, que agregaba un cuestionamiento ideológico y se definía como socialista. No obstante, los sectores desplazados de las conducciones sindicales pugnaban por “recuperar el gremio” y no discutían los aspectos centrales del modelo tales como el control de las obras sociales, la politización, la participación en cargos estatales, etc. Entre 1973 y 1976 estas corrientes internas se enfrentaron violentamente. Se ha denunciado que algunos elementos del sector “ortodoxo” formaron parte de la Triple A.

Ejército, con el apoyo de oficiales liberales revirtió esa tendencia y volvió a la buena tradición política. Esta es una tradición que se perdió el 4 de junio de 1943, cuando Justo ya había muerto, y se instauró el pensamiento fascista con Perón a la cabeza y el apoyo de la minoría del Ejército. Aquí se ubica el punto de partida de nuestro largo proceso de decadencia. La mayoría del pueblo argentino había dejado de creer en el modelo político, económico y social que encarnó la generación del 80, que a principios del siglo XX ubicó a la Argentina entre los primeros países del mundo. Esto se puso de manifiesto en las elecciones de 1916, en las que se aplicó por primera vez la Ley Sáenz Peña y que llevaron a Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la nación. Perón profundizó esta línea de pensamiento y le agregó las facetas autoritarias y corporativas que caracterizan el partido político que creó.

Creo que mientras mantengamos los criterios constitucionales y la legislación consiguiente que motivaron nuestro retroceso, podemos mejorar un poco pero no saldremos de la mediocridad a la que hemos sido relegados. Hemos llegado a donde estemos por pura y exclusivamente por obra de nosotros mismos (...) Hemos elegido el mal camino y mientras persistamos en él estamos condenando a vivir soportando las consecuencias [Blaquier, 2004, 240:241].

Este relato era compartido por Armando Braun, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y vicepresidente del grupo familiar conocido como La Anónima, quien en 1975 sostuvo que:

(...) la crisis que enfrenta hoy nuestro país tiene carácter general y alcanza igualmente a todas las manifestaciones de la vida nacional. Como un cáncer, la crisis ha penetrado, se ha extendido y se ha terminado por contaminar todo el cuerpo social argentino. (...) Así como el proceso iniciado en 1853 estuvo fundado en la primacía de la razón (...) el proceso político que comienza en 1945 tiene todas las características de los fenómenos patológicos. Al compás del bombo y de la matraca y ante multitudes vociferantes se apagó de pronto la voz de la razón, desplazada por el mito y la concupiscencia [Fernández, 1985].

A esta concepción antiperonista, los empresarios liberales agregaban una práctica hostil al modelo sindical, ya que adherían al “sindicalismo libre”, propuesto por Estados Unidos. Los grandes grupos económicos nacionales (Blaquier, Bemberg, Braun Menéndez, etcétera) y las grandes multinacionales auspiciaban sindicatos de empresa, en lugar de fuertes sindicatos de alcance nacional.

El problema es que no sólo hubo relatos opuestos y violencia verbal. El sector antiperonista, como ya lo había demostrado en 1955, era capaz de recurrir a las prácticas genocidas. Los bombardeos de Plaza de Mayo en junio de 1955 serían el punto de partida de un intento de eliminar físicamente a los opositores políticos. La violencia desplegada con posterioridad a la “Revolución Libertadora”, también configura un antecedente del “Proceso de Reorganización Nacional” (Duhalde, 2011).

El gobierno del general Juan Perón, plebiscitado en 1973, empezó a ser hostigado a partir del deceso del líder a mediados de 1974 y luego derrocado el 24 de marzo de 1976. Un análisis de las víctimas fatales de ese momento histórico sugiere que uno

de los aspectos que se intentó “reorganizar” a través de la violencia genocida fue la estructura sindical³.

En efecto, el asesinato o desaparición forzada de unos cincuenta dirigentes sindicales de todo el país, que pertenecían a diversas corrientes internas, tiene un alto contenido simbólico. La condena a muerte es significativa. Pero, además, constituye el punto de partida de un proyecto institucional que intenta modificar las bases del modelo sindical vigente.

³ Sobre el concepto de genocidio “reorganizador” de relaciones sociales e identidades, puede verse: Feierstein, Daniel, *El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007.

Primera fase de una cronología trágica

Una serie de asesinatos y desapariciones forzadas, ocurridos entre julio de 1974 y marzo de 1976, la mayoría de los cuales se le atribuyen al grupo paraestatal Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), fueron declarados por la Justicia como delitos de lesa humanidad por considerarse que respondieron a un plan sistemático de exterminio con participación estatal.

Muchas de las víctimas de esa serie trágica fueron dirigentes sindicales, o sea, miembros o exintegrantes de cuerpos directivos de asociaciones sindicales de trabajadores. En tanto los delitos que los afectaron son imprescriptibles, todavía se investiga acerca de los victimarios a través de numerosos procesos judiciales.

La primera víctima de esta cronología del terror antisindical sería **Ángel Vázquez**, dirigente del gremio de la Alimentación de Firmat, provincia de Santa Fe. Vázquez fue embestido por una camioneta en la madrugada del 31 de julio de 1974 y se considera que fue un atentado de la Triple A. El presunto asesinato se dio en el marco de un conflicto gremial con una gran empresa de la alimentación⁴.

Carlos Pierini, dirigente del Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE) de Ensenada, asesinado el 7 de agosto de 1974 por la Triple A, fue la segunda víctima. Pierini dirigió la huelga de 1968, de gran envergadura y que además contó con el apoyo de la CGT de los Argentinos, lo que le valió la reincorporación al gremio petrolero en 1974. A partir de una ordenanza municipal, una calle de La Plata lleva su nombre. Su mujer después reconocería a una de las personas que capitaneaba el grupo que lo asesinó: Aníbal Gordon, miembro de la Triple A.

La tercera víctima fue **Atilio López**, dirigente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y exvicegobernador de Córdoba. Fue asesinado el 16 de septiembre de 1974 por la Triple A en una ruta a Córdoba. López tenía una larga trayectoria como dirigente del gremio de los colectiveros, líder de la CGT combativa de Córdoba, referente del

⁴ Conforme al libro Cadús, Jorge y Palacios, Ariel, *Combatiendo al capital. 1973/1976 Rucci, sindicatos y Triple A en el sur santafecino*. Editorial Municipal de Rosario, Rosario, 2009; y testimonios de dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Santa Fe.

Cordobazo y acompañante de Ricardo Obregón Cano en la gobernación provincial durante 1973.

La cuarta víctima fue **Juan de la Cruz Olmos**, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Famaillá, asesinado el 31 de octubre de 1974 por miembros de la Triple A quienes colocaron bombas en su domicilio de esa localidad de Tucumán. Olmos nucleaba a la militancia política y social de Famaillá y había sido dirigente de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA).

El 24 de enero del año siguiente, **Alberto Bayarski**, dirigente del gremio de Vialidad Nacional, fue asesinado en Bahía Blanca. Bayarsky había sido dirigente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional y al momento de su asesinato dirigía una cooperativa de viviendas del gremio en la zona de Bahía Blanca. No hay datos precisos sobre los victimarios, pero se presume que fueron integrantes de la Triple A.

El 4 de septiembre fue asesinado **Hugo Frigerio**, secretario administrativo del gremio de empleados de Obras Públicas bonaerense. Frigerio era militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y su asesinato forma parte de la llamada “masacre de La Plata”, que se atribuye al grupo parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU).

Luego, fueron asesinados dos dirigentes del gremio gastronómico de la provincia de Mendoza: **Luis Alberto Granizo**, secretario de Actas, el 28 de noviembre de 1975 y **Néstor López Fornes**, secretario de Organización, asesinado el 13 de diciembre de 1975. Ambos dirigentes realizaban inspecciones y sostenían un diferendo judicial con los empleadores por el llamado “laudo gastronómico”. Fueron ejecutados por el Comando Pío XII, un organismo parapolicial⁵.

Con posterioridad, en Salta, **Guillermo Álzaga**, dirigente del gremio del Tabaco y exfuncionario provincial, fue asesinado el 19 de diciembre de 1975 y **Felipe Burgos**, secretario general de la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores, Campesinos y Afines (FUSTCA) y también exfuncionario, fue asesinado por la Triple A, el 6 de febrero de 1976. Los dos colaboraron con el gobernador Miguel Ragone, también asesinado. Álzaga fue director de Trabajo de la provincia y promovió diversas leyes laborales. Burgos fue director general de Promoción y Asistencia y desde ese cargo impulsó la creación de cooperativas obreras rurales, la entrega de tierras a comunidades aborígenes y programas de turismo social⁶. Se lo considera, además, el principal referente del sindicalismo católico en Argentina.

El 14 de febrero de 1976, en el marco del Operativo Independencia, fue desaparecido en Tafi Viejo, Tucumán, **Raúl Mauricio Lecchessi**, obrero ferroviario y dirigente gremial del Ferrocarril General Belgrano.

Por último, en marzo de 1976, días antes del golpe, resultaron víctimas dos dirigentes del gremio azucarero de Tucumán. Se trató de **Miguel “Caballo” Soria**, dirigente del sindicato del Ingenio Concepción, desaparecido el 9 de marzo de 1976, y de **Atilio Santillán**, secretario general de la FOTIA, asesinado el 22 de marzo de 1976 en Buenos Aires. El primero fue un dirigente del Partido Revolucionario de los

⁵ Conforme al libro *Hacerse cargo*, editado por la Coordinadora de expresos de Mendoza, y testimonios de Susana Muñoz y otros dirigentes de organismos de derechos humanos.

⁶ Conforme al libro *Ragone: mártir de la democracia*. Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Salta y Editorial América, Salta, 2006.

Trabajadores (PRT) y el segundo, un importante líder sindical, vinculado a la CGT de los Argentinos y al Plenario de Gremios Combativos.

Un somero análisis de las víctimas sindicales en los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 muestra la existencia de un plan sistemático de exterminio, que luego sería continuado y profundizado bajo la dictadura. Ellos eran conocidos dirigentes que se habían destacado durante el desarrollo de conflictos laborales o que realizaron acciones de promoción social de importancia. El hecho de que los victimarios se identificaran con la sigla genérica de Triple A, o similares, encubre acciones realizadas por fuerzas de seguridad, muchas veces bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas y, probablemente, con la participación de civiles.

Dirigentes sindicales víctimas de la dictadura cívico-militar

El 24 de marzo de 1976, día inaugural de la última dictadura cívico-militar, **Francisco Isauro Arancibia**, miembro de la Junta Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), fue asesinado en el local sindical en Tucumán; **René Salamanca**, ex secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), de Córdoba, fue detenido en esa provincia y continúa desaparecido, al igual que **Manuel Ascencio Tajan**, integrante del Consejo Directivo de la FOTIA, desaparecido en las inmediaciones de un ingenio.

Los tres dirigentes tenían gran representatividad. Isauro Arancibia era un antiguo líder del gremio de los maestros y hoy es uno de los símbolos de la CTERA. Salamanca fue un importante dirigente del sector clasista, afiliado al Partido Comunista Revolucionario, y referente de dicho sector. Una plaza frente a la empresa Renault en Córdoba lleva su nombre. Ascencio Tajan era un joven dirigente sindical de la FOTIA que se destacó en la gran huelga de 1974 (Taire, 2008).

El hecho del asesinato o desaparición de tres importantes dirigentes sindicales el 24 de marzo de 1976 marcó la continuidad de un plan de exterminio y fue una señal de lo que vendría.

En efecto, durante los meses siguientes, la dictadura cívico-militar aplicó una política de *shock*, que tuvo como trágico resultado la desaparición de un dirigente sindical por mes, como promedio. En particular, los años 1976 y 1977 registraron la mayoría de los asesinatos o desapariciones.

Esta estrategia, conducida por el entonces general Videla, presidente de la Junta Militar, habría contado con la complicidad de funcionarios civiles como José Alfredo Martínez de Hoz o Juan Alemann, pertenecientes al sector ultraliberal del empresariado, que habían sostenido opiniones doctrinarias totalmente opuestas al modelo sindical de la época. También podrían resultar comprometidos algunos directores empresarios, ya que se ha denunciado la cooperación logística

e informativa, con hechos tipificados como delitos de lesa humanidad, en determinados establecimientos donde hubo fuerte represión antisindical⁷.

Los días posteriores al 24 de marzo de 1976 mostraron una ofensiva del aparato represivo contra los dirigentes del gremio automotriz de Córdoba. Las víctimas fueron **Adrián Machado**, ex secretario gremial del SMATA y miembro de la Mesa de Gremios en Lucha, desaparecido el 25 de marzo; **Ernesto Martín Mora**, extesorero del Sindicato de Trabajadores de Materfer (Sitram), ejecutado el 27 de marzo en Córdoba, y **Maximino “Petizo” Sánchez** ex prosecretario administrativo del SMATA, secuestrado en Córdoba el 28 de marzo de 1976. Se trató de conocidos gremialistas, miembros de la Mesa de Gremios en Lucha, cuyos casos fueron investigados en relación con el juicio contra Luciano Benjamín Menéndez por los crímenes llevados a cabo en el centro clandestino de detención (CCD) “La Perla”.

El 28 y 29 de marzo fueron secuestrados, también en Córdoba, **Wenceslao Vera**, del gremio de Obras Sanitarias, que continúa desaparecido, y **Raúl Cassol**, del gremio lechero, secuestrado en Córdoba y trasladado a la Unidad 9 de La Plata, donde fue asesinado.

En abril, la represión volvió a golpear a la FOTIA y al SMATA. **Zoilo Manuel Reyes**, dirigente de la FOTIA, del Ingenio Concepción, fue desaparecido el día 2; **Francisco Gregorio Ponce**, dirigente del SMATA, el 6, en Catamarca, y el importante gremialista **Benito Romano**, dirigente de la FOTIA, fue detenido en Buenos Aires el 14 de abril de 1976 y aún está desaparecido. Romano fue dirigente de la CGT de los Argentinos, diputado nacional y director obrero de una empresa estatal azucarera.

En este período también desaparecieron dos sindicalistas del gremio lechero de Córdoba: **Antonio Pedro Juárez**, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), desaparecido en Córdoba el 13 de abril de 1976 y de Raúl Cassol, ya mencionado, que fue asesinado en La Plata (Romano *et al.*, 2010).

En mayo, desapareció en San Francisco, Córdoba, **Oscar Ventura Liwacky**, secretario general del gremio de Empleados de Comercio, y de la CGT local. Fue secuestrado el día 12 y luego asesinado⁸.

El 1° de junio, en Chaco, desapareció **Secundino Vallejo**, dirigente de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) y militante de la Juventud Peronista. El 16 de junio fue asesinado otro secretario general, **Luciano Sander**, trabajador de Astilleros Río Santiago y ex secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)-Ensenada.

En julio desaparecieron dos importantes dirigentes: **Carlos Correa**, empleado de la empresa Loma Negra y secretario adjunto del sindicato de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que residía en Olavarría, provincia de Buenos Aires, pero fue desaparecido el 18 julio en San Juan. Y **Eduardo Requena**, dirigente del gremio de maestros y fundador de la CTERA, fue secuestrado el 26 de julio en Córdoba.

⁷ La complicidad empresarial ha sido denunciada en relación con la llamada Noche del Apagón, ocurrida en Villa General San Martín, Jujuy, localidad dominada por el Ingenio Ledesma, de la familia Blaquier; los conflictos en Astilleros Astarsa; las fábricas automotrices Mercedes-Benz, Ford, etc.

⁸ Su asesinato, junto con el de otros vecinos de San Francisco, sería una represalia a una gran huelga que hubo en 1973 contra la empresas de fideos Tampieri: Gómez, Jacqueline, *Huelga y rebelión obrera en San Francisco: “El tampierazo”*.

El 14 de septiembre, **Martín Rosa Decima**, dirigente del Ingenio Santa Rosa, fue secuestrado en Tucumán y continúa desaparecido.

El 11 de octubre, fue asesinado el exdirigente del gremio automotriz **Florencio Díaz**. En 1971, había sido elegido secretario general del Sitram. Durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, fue despedido y perseguido. Más tarde, en 1975, integró la Coordinadora de Gremios en Lucha y el Bloque Gremial del Peronismo Auténtico. Lo asesinaron mientras lo sacaban de una unidad carcelaria de Córdoba.

En el mismo mes de octubre fueron víctimas tres dirigentes mendocinos, **Héctor Brizuela**, dirigente del gremio vitivinícola de Mendoza, asesinado el 19 de octubre de 1976; **Antonio García**, también dirigente del gremio vitivinícola, asesinado un día después, y **Juan Bravo Zaca**, dirigente del gremio de actores, desaparecido el 21. Los dos primeros eran trabajadores de Bodegas Giol y afiliados al Partido Comunista (Ubertalli, 2010).

En noviembre, la víctima fue **Tomás Carmen Di Toffino**, dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Di Toffino fue secuestrado a la salida de su trabajo en la Empresa Provincial de Energía (EPEC), el día 30. Según testimonios, se desempeñó como subsecretario administrativo, secretario gremial y secretario adjunto del gremio y, junto con Agustín Tosco, secretario general del sindicato, participó activamente en las luchas sociales y políticas de Córdoba.

En diciembre de 1976, desaparecieron tres importantes sindicalistas: **Fortunato Leandro Fote**, dirigente de la FOTIA, secuestrado en Buenos Aires el día 1; **Jorge Di Pasquale**, dirigente de empleados de Farmacia, desaparecido el 28 también en Buenos Aires y **Marina Vilte**, dirigente del gremio docente de Jujuy, desaparecida el día 31. Fortunato Fote fue un destacado dirigente azucarero del Ingenio San José, que fue electo diputado provincial en Tucumán y formó parte del Frente Antimperialista y por el Socialismo (FAS). Fue secuestrado en Buenos Aires y trasladado a Tucumán. Se acusa al represor Roberto “El Tuerto” Albornoz del suplicio de Fote en un centro clandestino de detención en Tucumán. Di Pasquale fue uno de los sindicalistas más emblemáticos. Era el máximo dirigente del gremio de empleados de Farmacia y había sido de la conducción de la CGT de los Argentinos. Fue dirigente del Peronismo de Base. Sus restos fueron encontrados en 2011. Vilte fue una de las fundadoras del gremio CTERA, creado en 1973 y se destacó por su militancia en Jujuy (D’Andrea, 2008).

En enero de 1977, desaparecieron tres dirigentes sindicales en Tucumán. Ellos fueron **Damián Octavio Márquez**, dirigente de la CGT de Tucumán, secuestrado el 13 de enero; **Arnaldo César Correa**, dirigente gremial del Ingenio Providencia, secuestrado el día 27 y **Felipe Arturo Urueña Álvarez**, dirigente ferroviario, desaparecido el día 28, en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

Márquez fue secretario general de la CGT Regional de Tucumán, peronista ortodoxo, y víctima del Operativo Independencia. Fue elegido senador provincial por el peronismo. Una plazoleta lleva su nombre en la ciudad de San Miguel de Tucumán. César Correa, dirigente gremial del Ingenio Providencia, fue visto entre los desaparecidos del centro clandestino de detención Batallón de Arsenales 5 “Miguel de Azcuénaga”. Felipe Urueña era empleado del Ferrocarril Gral. Belgrano y un conocido dirigente gremial tucumano. No hay testimonios de su paso por un CCD.

En febrero de 1977, desaparecieron dos importantes gremialistas del sector ortodoxo. El secretario general de Luz y Fuerza de Capital, **Oscar Smith**, desaparecido el 11 de febrero en Avellaneda y **Antonio Alejandro Cassaretto**, secretario general del gremio de municipales, desaparecido el 12 en Buenos Aires. Ambos dirigentes son reivindicados por las conducciones actuales de sus gremios como mártires de la última dictadura cívico-militar. Cassaretto fue visto en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde fue torturado, y aún permanece desaparecido. Smith fue detenido luego de un paro del gremio de Luz y Fuerza.

Durante ese mes, también desaparecieron dos dirigentes históricos de la FOTIA tucumana: **Juan Faustino Rodríguez**, dirigente del Ingenio San José, desaparecido el 16 de febrero, y **José Simón Campos**, dirigente del Ingenio Santa Rosa, desaparecido el día 21. Según testimonios, Faustino Rodríguez murió fusilado en un centro clandestino de detención, a la vista de su hijo, y Simón Campos fue secuestrado a la salida del Ingenio Santa Rosa por el Ejército.

El 19 de abril de 1977 desapareció, en Tucumán, otro dirigente histórico de la FOTIA, el exgremialista y diputado nacional **Bernardo Samuel Villalba**.

A mediados de 1977 fueron asesinados en distintos enfrentamientos con fuerzas armadas y de seguridad dos antiguos y emblemáticos dirigentes sindicales. El 12 de junio, en Capital Federal, asesinaron a **Haroldo Santos Logiuratto**, ex secretario general de la CGT de La Plata, Berisso y Ensenada; y el 6 de septiembre asesinaron y desaparecieron a **René Oberlín**, ex dirigente sindical, fundador del Sindicato de Viajantes de Santa Fe.

En septiembre de 1977, desaparecieron otros dos dirigentes sindicales: **Ernesto “Semilla” Ramírez**, dirigente del gremio de trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de La Plata, y **Luis Rojas**, dirigente del Ingenio Concepción en Tucumán.

El listado luctuoso de 1977 se completa con el dirigente portuario **Eustaquio Peralta**, secretario adjunto del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que desapareció el 28 de diciembre.

En 1978, el accionar criminal del terrorismo de Estado se desacelera. En Jujuy desaparecieron en distintos momentos dos sindicalistas. Primero, **Máximo Guillermo Tell**, dirigente telefónico, desaparecido el 4 de mayo de 1978 y, en segundo lugar, **Avelino Bazán**, dirigente de los mineros, desaparecido el 25 de octubre de 1978, en Jujuy. Tell había promovido en Jujuy la constitución del sector gremial que auspiciaba la CGT de los Argentinos conducida por Raimundo Ongaro (Fidalgo, 2001). Bazán tenía una larga trayectoria sindical y política, y fue un dirigente histórico de la Mina de Aguilares (Bazán, 2011).

Completa la lista otro dirigente minero: **José Benedicto Ortiz**, de AOMA, herido de muerte en Mendoza el 30 de marzo de 1982, en el marco de una marcha de la CGT por “Pan, paz y trabajo”.

Represión en los lugares de trabajo: delegados y activistas sindicales y la responsabilidad de civiles

Se ha dicho que los sindicatos cumplían una importante función reivindicativa en los lugares de trabajo. Tanto la primera experiencia peronista (1946-1955) como la segunda gestión (1973-1975) se caracterizaron por leyes que protegieron a los delegados de empresas y oficinas, y por una actividad muy intensa de la representación gremial en el ámbito laboral. Funcionaban comisiones internas, cuerpos de delegados, delegados y subdelegados de sección, etc. Pero, además, eran muy frecuentes las agrupaciones gremiales y las listas sindicales que participaban en comicios y un conjunto de trabajadores que se identificaban a sí mismos como “activistas” de cada gremio.

Un análisis de las víctimas de la represión de la última dictadura cívico-militar y de los grupos paramilitares que actuaron en la coyuntura anterior, demuestra que los principales gremios fueron afectados en los lugares de trabajo. Cientos de trabajadores que se desempeñaban como delegados o activistas sindicales figuran en los registros de víctimas del terrorismo de Estado, y esta comprobación se ratifica por investigaciones cualitativas.

Datos todavía muy parciales de una investigación cuanti-cualitativa en curso sugieren que en algunos gremios hubo decenas de víctimas que cumplían roles de activistas o delegados sindicales.

Los principales gremios afectados fueron los siguientes: el gremio ferroviario, que cuenta con un registro de alrededor de 90 víctimas (Sena, 2009); se estima que el gremio azucarero, FOTIA, tuvo más de 200 víctimas (Taire, 2009), pero solo existen registros de alrededor de 80 víctimas en siete ingenios azucareros de Tucumán y Jujuy; en el gremio metalúrgico se calcularon más de 200 víctimas, pero por el momento existen registrados 75 casos en dos grandes grupos económicos: Techint y el grupo Acevedo (Acindar), a su vez, como blanco de la represión, se destacó la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); el gremio automotriz registró 80 víctimas en ocho grandes empresas, siendo los casos más emblemáticos los de las empresas Ford, Renault, Fiat y Mercedes-Benz; en el gremio

de trabajadores del Estado, ATE, existieron al menos 44 víctimas en un solo astillero del Estado y también se registraron numerosas víctimas en la Comisión Nacional de Energía Atómica; el gremio gráfico asentó 84 víctimas, según el sindicato, y, en particular, en grandes empresas editoriales como Clarín, La Nación, Nueva Provincia y Atlántida; en el gremio textil, hay unas 30 víctimas registradas en solo seis empresas, en particular es importante el caso de Grafa; en el gremio de la carne se registraron 20 víctimas solamente en dos empresas y resulta sobresaliente el caso de la empresa Swift y en el gremio de empleados judiciales hay más de 10 víctimas, tomando en cuenta empleados nacionales y provinciales.

En algunas situaciones, las Fuerzas Armadas y de Seguridad ocuparon grandes establecimientos y actuaron con información y logística proporcionada por los directivos de las empresas. Esto se denunció tempranamente en la primera edición del *Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas “Nunca Más”* y se ha confirmado en declaraciones testimoniales en diversos juicios realizados contra represores en los últimos años. Como consecuencia, hay denuncias en diversos tribunales del país y del exterior contra directivos de empresas acusados de complicidad con la represión⁹. Por esta vía se empieza a discutir la responsabilidad de civiles, empresarios o personal superior de empresas, por su participación en hechos represivos durante la última dictadura.

Esto último es novedoso y coloca a la lucha contra la impunidad impulsada en la Argentina por el Estado y organismos de derechos humanos en un rol de vanguardia en el panorama mundial.

⁹ En el histórico fallo “Ingenieros c/Techint”, de febrero de 2011, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió declarar imprescriptible una acción iniciada con motivo de un trabajador desaparecido en el lugar de trabajo.

Reglas estatales dictadas por la última dictadura en materia sindical

Un análisis detallado de las medidas que tomó la última dictadura cívico-militar en materia laboral y sindical confirma que el objetivo a lograr era desarticular un modelo específico. Se atacaron una serie de funciones que cumplían los sindicatos y se buscó favorecer un sistema fragmentado y débil.

Se mencionan, a continuación, algunas de las medidas que el gobierno militar denominó “leyes”, pero que en rigor fueron reglas estatales emanadas de un poder de facto. Pocos días después del golpe militar, el 7 de mayo de 1976, se sancionó el llamado decreto-ley 21.307 que suspendió el funcionamiento de las Comisiones Salariales Paritarias y autorizó al Poder Ejecutivo a establecer los aumentos salariales. De esta manera, se arremetió contra una herramienta fundamental del sindicalismo peronista, como lo eran los convenios colectivos por rama. El resultado fue obvio, al cabo de tres años el poder adquisitivo de los salarios se redujo un 50% (Cieza, 1982).

Por una ley del mismo día del inicio del golpe, se suspendió el ejercicio del derecho de huelga y de cualquier medida de fuerza que pudiera afectar la producción. Esta disposición fue complementada por la ley 21.400 del 3 de septiembre de 1976, que estableció penas para los trabajadores que participaran en medidas de fuerza y autorizó a las empresas a despedir sin indemnización a obreros detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. En otras palabras, se volvió a épocas en que la protesta obrera se enfrentaba con el Código Penal y se alteró profundamente la Ley de Contrato de Trabajo al permitir cesantear a detenidos.

La ley 21.279 del 13 de mayo de 1976 derogó una serie de artículos de la flamante Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo, sancionada en 1974. En especial se suprimieron artículos referidos a derechos de los asalariados en los lugares de trabajo y derechos de la mujer trabajadora. Esta mutilación de la ley originaria sobre Contrato de Trabajo aún no ha sido reparada en su totalidad¹⁰.

¹⁰ El asesor de la CGT y diputado nacional Héctor Recalde ha presentado algunos proyectos para recuperar artículos de la ley 20.744 originaria.

La ley 21.356 suspendió la elección de delegados, que pasaron a ser designados por el Ministerio de Trabajo a propuesta de las empresas y la burocracia sindical. Respecto a los trabajadores del Estado, la ley 21.260 autorizó al Poder Ejecutivo a cesantar a todo empleado sospechoso de “actividades disociativas, o vinculación con la subversión”.

Resoluciones del Ministerio de Trabajo anularon la jornada de seis horas en gremios como el petrolero y el de Luz y Fuerza (Díaz, 2010).

La ley 22.105, dictada en 1979, atacó directamente el modelo sindical peronista. Disolvió la CGT, prohibió las organizaciones sindicales que excedieran el marco de una provincia, quitó a los gremios la administración de las obras sociales (artículo 9), prohibió la política partidaria en la acción sindical (artículo 8), e impidió a los sindicatos realizar toda actividad lucrativa (artículo 11).

Finalmente, esta ley contenía una serie de disposiciones tendientes a limitar a las organizaciones de base: los delegados no podían tener antecedentes penales o “policiales”, se elegían cada 100 obreros y no por sección y no tenían estabilidad. En resumen, los tradicionales cuerpos de delegados fueron obstaculizados (Cieza, 1983; Abós, 1983).

En estas cuestiones, los daños producidos por la última dictadura cívico-militar parecen irreversibles. La figura del delegado (y subdelegado) de sección, prácticamente, ha desaparecido. En la actualidad, los cuerpos de delegados tienen mucha menor densidad que en los años 1974-1975 (Basualdo, 2010). Los convenios colectivos actuales no superan los celebrados en 1974 y 1975. Por último, las normas laborales contenidas en la tradicional ley 20.744 y derogadas por la dictadura, aún no han sido recuperadas totalmente.

La investigación sobre la represión antisindical

Familiares de las víctimas y diversas organizaciones denunciaron oportunamente la desaparición de dirigentes sindicales. En 1980, la Comisión Argentina de Derechos Humanos elaboró en España una lista muy completa. A su vez, la Federación Sindical Mundial, la Confederación Mundial del Trabajo, la Confederación Internacional de Organizaciones Internacionales libres y varias otras organizaciones sindicales presentaron en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una querrela en 1976 (caso 842). El gobierno militar respondió que 65 de las personas denunciadas no habían sido objeto de órdenes de captura ni estaban detenidas. Más tarde, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprobó, a fines de 1979, la existencia de un grupo de sindicalistas desaparecidos. Tanto la OIT como la CIDH exhortaron al gobierno militar a investigar y esclarecer con celeridad la desaparición de sindicalistas, ya que una situación de impunidad impedía el pleno ejercicio de los derechos sindicales.

Como se trataba de crímenes en perjuicio de sindicalistas, que tenían fueros establecidos por la ley sindical vigente, surgió una responsabilidad muy clara para el Estado, fijada por la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo:

(...) El asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron dichos asesinatos, y así, dentro de lo posible, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de los mismos [OIT Recopilación de 1985].

El primer gobierno constitucional posterior a la dictadura tuvo una actitud ambivalente. Por un lado, el Dr. Raúl Alfonsín, en su campaña electoral de 1983, denunció un presunto pacto militar-sindical y acusó a dirigentes gremiales de haber acordado con militares la continuidad de la dictadura (Díaz, 2010). Por otro lado, se

puso en marcha la Conadep, en cuyo informe se menciona en un apartado especial (Capítulo II, Víctimas; apartado H, Gremialistas) la represión en los lugares de trabajo y se relatan algunos casos de dirigentes gremiales desaparecidos, como los de René Salamanca y Tomás Di Toffino, vistos en el centro clandestino de detención de “La Perla”, en Córdoba, o los de Oscar Smith, Marina Vilte y Eduardo Requena. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida frustraron la investigación judicial de la represión antisindical.

Con el gobierno de Néstor Kirchner se volvieron a impulsar los juicios contra los represores, al anularse las leyes de impunidad y declararse inconstitucionales las leyes y los indultos. En las megacausas “La Perla” (Córdoba), “Campo de Mayo”, y “Arsenales” (Tucumán), y en otras causas judiciales, se pudo esclarecer la desaparición de algunos dirigentes sindicales. Otros asesinatos y desapariciones siguen sin aclararse.

Más allá de la investigación judicial, comienza a derrumbarse un manto de olvido y una visión parcial sobre algunos aspectos de la represión. Cada vez más aparece ante la opinión pública la evidencia de que el contenido de la última dictadura cívico-militar incluye un componente claramente antisindical. Lejos de verificarse un pacto “militar-sindical” se comprueba que una parte sustancial de las víctimas fueron dirigentes sindicales de todas las corrientes internas.

Conclusiones

Un análisis de alrededor de cincuenta víctimas del terrorismo de Estado, que se caracterizan por haber ocupado cargos sindicales, llama la atención sobre algunos aspectos del plan de la última dictadura. La “reorganización nacional” que preconizaron las juntas militares tuvo una dimensión antisindical que consistió en alterar sustancialmente el modelo sindical vigente y reemplazarlo por otro más compatible con el patrón de acumulación económica planteado. Las víctimas simbolizaban una serie de aspectos que los genocidas critican y rechazan. Se trató de dirigentes sindicales politizados, que participaban de actividades asistenciales o de seguridad social, que se ponían al frente de reivindicaciones del personal que representaban, y que, en muchos casos, habían sido elegidos para cargos públicos.

El análisis de la represión en los lugares de trabajo, en especial sobre activistas y delegados sindicales, y de las reglas estatales que se tomaron sobre cuestiones laborales y sindicales, refuerza la comprobación acerca de un componente antisindical en la política desplegada por la última dictadura. Existe una total coincidencia entre la concepción antisindical de algunos dirigentes empresariales y la política aplicada por la última dictadura.

Respecto a la eficacia del componente antisindical del terrorismo de Estado la comprobación no es fácil. Una primera impresión indicaría que el proyecto antisindical fracasó, ya que se reconstituyó la CGT y se sancionaron nuevas leyes sobre asociaciones sindicales y obras sociales que volvieron al esquema anterior. Sin embargo, el peso del sindicalismo en los lugares de trabajo nunca se logró recuperar, algunas conquistas legales o convencionales se perdieron para siempre y las experiencias de cogestión y participación en la dirección de las empresas u organismos estatales no tuvieron continuidad.

Tampoco se recuperó el prestigio del sindicalismo y la convicción mayoritaria de que cumple una función útil. En plena dictadura, la Junta Militar estableció la necesidad de una “reafiliación” y, a pesar del terrorismo de Estado, dos millones ochocientos mil argentinos volvieron a afiliarse (Díaz, 2011). La instalación del

neoliberalismo en la Argentina, como corriente dominante en las políticas públicas a partir de 1975-1976 y hasta 2001-2002 modificó las condiciones materiales y la percepción de la población sobre el sindicalismo. Las encuestas de opinión pública de los años 90 mostraron una baja estima acerca del sindicalismo.

Es complejo establecer los factores causales de este cambio, sin embargo, se mencionarán algunos. La política neoliberal generó cambios, que luego aprovechó, en la estructura ocupacional. Con la desindustrialización, el sindicalismo más dinámico pasó a asentarse en los servicios. Otro aspecto es que las estructuras sindicales tradicionales continuaron repitiendo sus prácticas y se consolidaron aspectos rutinarios y de franca burocratización. Algunas organizaciones compensaron la pérdida de beneficios institucionales a través de la negociación colectiva con nuevas actividades lucrativas. El sindicalismo pasó a tener una dinámica “economicista”. Un sector opositor a la CGT fundó en la década del 90 una nueva central, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), e impugnó una parte de la dirigencia tradicional, bajo la acusación de “sindicalismo de negocios”.

Más allá de los debates, algo queda claro. A fines del siglo XX, el sindicalismo ya no era la “columna vertebral” de un proyecto nacional y sus funciones se concentraban en reclamar mejoras salariales y desarrollar actividades de seguridad social (y algunas lucrativas). La profunda depresión de 1999-2002 generó una crisis adicional en el sindicalismo tradicional y su prestigio llegó al punto más bajo. En este sentido, es interesante recordar la opinión de Néstor Kirchner en el año 2003, pocos días antes de iniciar su gestión de Gobierno:

(...) Hoy el sindicalismo argentino tiene dos opciones: ampliar con honradez y capacidad personal las tareas y el campo de acción, y convertirlo en un movimiento en defensa de los trabajadores, o bien estar condenado a una especie de degeneración corporativista, estigma que lo llevará a la pérdida de influencia política, identidad propia, militancia y confianza por parte de los trabajadores que dice representar.

Es necesario impregnar de solidaridad a todos los sectores de la clase trabajadora, pero esta no puede ser motorizada por intereses materiales inmediatos, sino por motivaciones más profundas, en el orden moral, histórico y cultural, y por el poder movilizador de un proyecto histórico político común, por un sueño que interprete a todos los trabajadores y alimente la esperanza colectiva (...) [Kirchner-Di Tella, 2003:61].

Propuestas y políticas públicas

Las políticas públicas aconsejables para enfrentar el componente antisindical del genocidio son la investigación y el castigo de los responsables, la reparación de las víctimas y la implementación de medidas de promoción de la memoria histórica y de la garantía de no repetición.

Respecto a la investigación judicial, se han esclarecido algunos casos en las megacausas mencionadas con anterioridad y están en curso otras que seguramente arrojarán nuevas comprobaciones. Crecen las organizaciones de víctimas, en especial las vinculadas a delegados desaparecidos. Se empiezan a presentar denuncias contra directivos y gerentes de empresas. A este nivel, pareciera que solo cabe reclamar mayores recursos para que la Justicia realice su tarea, y una mayor celeridad en las causas. La experiencia argentina es, en este terreno, muy reconocida a nivel internacional.

En relación con la reparación de las víctimas, se sancionaron las leyes 24.023 y 24.411 que establecen indemnizaciones para presos y familiares de detenidos-desaparecidos entre 1974 y 1983. La llamada Ley Doveni amplía los beneficiarios de las reparaciones al contemplar un ámbito temporal más prolongado. Cabe reclamar una mayor celeridad en la vía administrativa. Pero también es pertinente demandar otras medidas compensatorias. Por ejemplo, que las empresas, especialmente las del Estado, ofrezcan puestos de trabajo a los hijos de las víctimas.

Con referencia a la promoción de la memoria histórica, muchas de las víctimas sindicales han sido homenajeadas con placas recordatorias y con nombres de calles, plazoletas o caminos que tienden a conservar vivo su legado. Se han realizado películas y documentales sobre la trayectoria de dirigentes y delegados sindicales.

Sin embargo, la mejor garantía de no repetición de prácticas antisindicales genocidas es el total esclarecimiento de los asesinatos y el desarrollo de una política de diálogo social que considere como legítimo el conflicto y que castigue con energía y rapidez cualquier acción violenta en perjuicio de los trabajadores.

Bibliografía

- Abós, Álvaro, *La columna vertebral*. Legasa, Buenos Aires, 1983.
- Bazán, Avelino, *El porqué de mi lucha*. Secretaría de Comunicación Pública, Buenos Aires, 2011.
- Basualdo, Victoria, “Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina”. En Arceo, Nicolás y Socolovsky, Yamile, *Desarrollo económico, clase trabajadora y luchas sociales en la Argentina contemporánea*. IEC, Buenos Aires, 2010.
- Blaquier, Carlos Pedro, *Alberdi y Roca. Proyecto y realización de la Argentina exitosa*. Lons SA, Buenos Aires, 2004.
- Cadús, Jorge y Palacios, Ariel, *Combatiendo al capital. 1973/1976 Rucci, sindicatos y Triple A en el sur santafecino*. Editorial Municipal de Rosario, Rosario, 2009.
- Cieza, Daniel, *Argentina ante el Bicentenario*. De la campana, La Plata, 2010.
- Cieza, Daniel, “La dimensión laboral del genocidio”. En *Revista de Estudios sobre Genocidio*, Volumen 3, EDUNTREF, Buenos Aires, 2009.
- Cieza, Daniel, *De la cultura del trabajo al malestar del desempleo*. CREALC, CED, HCD, La Plata, 2000.
- Cieza Fernández, Daniel, “Política laboral del estado y características de la respuesta obrera en la Argentina”. En *Márgenes*, número 2, Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, Xalapa, 1982.
- Díaz, Claudio, *El movimiento obrero argentino*. Fabro, Buenos Aires, 2010.
- D’Andrea, Sofía, *Marina Vilte. Blanco en los 70*. De la campana, La Plata, 2008.
- Duhalde, Eduardo Luis, *El Estado terrorista argentino*. Eudeba, Buenos Aires, 1999.
- Duhalde, Eduardo Luis, discurso al conmemorarse el 56° aniversario de los bombardeos de junio de 1955, Buenos Aires, 2011.

Feierstein, Daniel, *El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007.

Fernández, Ester, *Comportamiento de los organismos empresarios argentinos (1976-1983)*. CEPNA, Buenos Aires, 1985.

Fidalgo, Andrés, *Jujuy 1966/1983. La rosa blindada*, Buenos Aires, 2001.

James, Daniel, *Resistencia e integración*. 2ª ed., Siglo XXI, Buenos Aires, 2010.

Izaguirre, Inés, *Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina*. Eudeba, Buenos Aires, 2009.

Kirchner, Néstor y Di Tella, Torcuato, *Después del derrumbe*. Galerna, Buenos Aires, 2003.

Muleiro, Vicente, *El golpe civil*. Planeta, Buenos Aires, 2011.

Perón, Juan Domingo, *Actualización política y doctrinaria para la toma del poder*. Pevuel Ediciones, Buenos Aires, 1971.

Romano, Silvia et al, *Vidas y ausencias*. EUC, Córdoba, 2010.

Werner, Ruth y Aguirre, Facundo, *Insurgencia obrera en la Argentina, 1969-1975*. IPS, Buenos Aires, 2007.

Taire, Marcos, *Luchas obreras en Tucumán*. Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2009.

Torrado, Susana, *El costo social del ajuste*. Edhasa, Buenos Aires, 2010.

Ubertalli, Jorge, *El peligro rojo*. Ad. Acercándose, Buenos Aires, 2010.

Fuentes documentales y archivos digitales

Conadep-Archivo Nacional de la Memoria

Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos

Asociación de ex Presos Políticos

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

Familiares de Detenidos Desaparecidos de Tucumán

Asociación de ex Presos Políticos de Tucumán

Anexo: Actuación sindical y política de los principales dirigentes asesinados o desaparecidos¹¹

Hipólito Atilio López

Nacido en 1929, Hipólito Atilio López abrazó desde joven el sindicalismo en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que le permitió encabezar la Confederación General del Trabajo (la denominada CGT combativa) de Córdoba y liderar en 1969, junto con Elpidio Torres y Agustín Tosco, el denominado “Cordobazo”, el movimiento social que fue la antesala de la caída del gobierno militar de Juan Carlos Onganía.



López fue un activo dirigente sindical cordobés y acompañó como vicegobernador a Ricardo Obregón Cano durante 1973.

El 16 de septiembre de 1974, en las cercanías de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, donde se encontraba por un viaje, López fue acribillado por miembros de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Una multitud acompañó sus restos mortales antes de que fueran sepultados en el cementerio San Jerónimo, de la capital cordobesa.

Se denomina “Autovía del Bicentenario Atilio López” a la Ruta Provincial N° 5, en el tramo comprendido entre la ciudad de Córdoba y Alta Gracia.

¹¹ Nota: El Anexo tiene como objetivo dar a conocer la trayectoria de algunos dirigentes. Los datos biográficos y las fotos de los dirigentes surgen de notas de organismos de derechos humanos o de los gremios en que participaron. Si se deslizó algún error involuntario, se solicita informar al Archivo Nacional de la Memoria para corregirlo en una segunda edición.

Florencio Díaz

Florencio Díaz nació el 17 de diciembre de 1930 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. El 11 de octubre de 1976, a los 45 años, fue asesinado en un fraguado intento de fuga en la cárcel de San Martín, provincia de Córdoba.

Díaz se radicó en Córdoba donde comenzó a trabajar en la fábrica Fiat. En 1971 fue elegido secretario general del sindicato de trabajadores de Materfer (Sitram) que jugó un papel importante en el sindicalismo nacional al expresar un nuevo sector, identificado con el “clasismo”.

Luego, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, fue despedido y perseguido. En 1973 ingresó a Vialidad Provincial y retomó la actividad gremial como delegado. Más tarde, en 1975, integró la Coordinadora de Gremios en Lucha y el Bloque Gremial del Peronismo Auténtico.

Díaz fue un reconocido dirigente gremial y un militante político. Militó en el Peronismo de Base y en la actualidad es uno de los símbolos del peronismo combativo.



Atilio Santillán

Atilio Santillán nació en Bella Vista, provincia de Tucumán, en 1935 y fue asesinado el 22 de marzo de 1976. Fue un importante dirigente sindical, víctima de la violencia política de la mitad de los años 70.

Empezó como delegado sindical y en 1963 ya era secretario general del Sindicato del Ingenio Bella Vista. Luego, entre 1964 y 1968, y entre 1973 y su muerte fue secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), poderosa organización sindical que llegó a sindicalizar a miles de trabajadores azucareros. Mantuvo una política gremial muy combativa y enfrentó a la dictadura del general Onganía. Durante su gestión sindical se lograron avances muy importantes como medicamentos gratuitos para los afiliados y la participación del gremio en la dirección de la empresa estatal CONASA.

Fue asesinado el 22 de marzo de 1976, en Buenos Aires. Los familiares responsabilizan al Ejército, un hermano denunció al exgeneral Antonio Domingo Bussi, al exgeneral Llamil Reston y a algunos empresarios como José Martínez de Hoz de su asesinato. Los trabajadores del gremio azucarero y diversos funcionarios públicos nacionales y provinciales le han rendido homenaje en los últimos años.



Isauro Arancibia

Isauro Arancibia, nacido en Monteros, provincia de Tucumán, se desempeñó como maestro rural desde joven. Arancibia fue cofundador de la CTERA y miembro de la primera Junta Ejecutiva del gremio nacional de los docentes, en la que ocupó el cargo de secretario general adjunto.

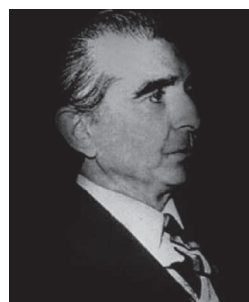
Fue asesinado por el Ejército en el local de su sindicato, el 24 de marzo de 1976, junto con su hermano Arturo.

En su gremio se lo rescata como uno de los primeros dirigentes docentes populares. Fue secretario general de la Agrupación de Trabajadores de la Educación Provincial (ATEP), organización gremial de los maestros tucumanos, y es recordada su actuación en las huelgas de 1958 por el Estatuto del Docente. En ese momento se luchaba por la enseñanza laica y por la equiparación salarial de los maestros provinciales con los nacionales.

Su accionar gremial estuvo orientado a mejorar la legislación en educación y buscó la unidad con la FOTIA, dirigida por Atilio Santillán.

Su trayectoria es rescatada en videos y en el libro *La oruga sobre el Pizarrón*, del escritor Eduardo Rozenvaig.

En la actualidad, el gremio CTERA le rinde homenajes en forma periódica y difunde su pensamiento y su obra.



René Salamanca

René Salamanca nació en Córdoba en 1940 y fue desaparecido el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe cívico-militar. Salamanca fue secretario general del gremio automotor (SMATA) en la seccional Córdoba a partir de 1972 y reelecto en 1974. Se lo considera referente del sector clasista, que comenzó con los sindicatos de empresa como Sitrac y Sitram, y alcanzó su máxima expresión con el triunfo de la lista Marrón en el SMATA de Córdoba.

Salamanca era un dirigente del Partido Comunista Revolucionario y en la actualidad su figura es destacada por la corriente clasista y combativa.

Como testimonios de su memoria, la plaza ubicada frente a la empresa Renault en la provincia de Córdoba lleva el nombre “René Salamanca y obreros mártires de la represión”. También lleva su nombre un barrio en el municipio bonaerense de La Matanza.



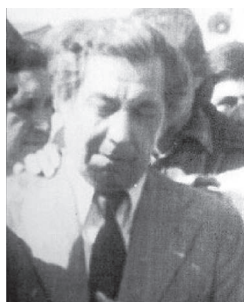
Benito Romano

Benito Romano nació en Ranchillos, Tucumán, en 1928 y fue desaparecido el 14 de abril de 1976 en Buenos Aires. Romano fue un importante dirigente de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA). Fue dirigente en el Ingenio “La Esperanza” y luego alcanzó la conducción de la FOTIA.

Dirigió una importante huelga contra las políticas de ajuste de Arturo Frondizi.

Con una dilatada trayectoria política y sindical ocupó cargos de relieve, como secretario del Interior de la CGT de los Argentinos, legislador nacional y director obrero en una empresa estatal azucarera.

Benito Romano es uno de los principales símbolos de la FOTIA y del sindicalismo combativo del interior del país.



Eduardo Requena

Eduardo Raúl Requena nació el 15 de noviembre de 1938 en Villa María, Córdoba, y fue secuestrado en julio de 1976. Fue dirigente del Sindicato de Docentes Privados y Particulares de Córdoba (SEPPAC).

Participó en el Congreso constitutivo de la CTERA, fue miembro de su Junta Ejecutiva y secretario de la rama de docentes privados en las dos primeras juntas ejecutivas (1973-1976).

Integró la mesa de gremios combativos en Córdoba y fue uno de los dirigentes más importantes en esta provincia.

Una de las frases del “gallego” Requena era: “Algún día todos los educadores entenderemos que somos laburantes, entonces la unidad será una realidad”.

En la actualidad, una escuela secundaria lleva su nombre en Córdoba, mientras que en Villa María su nombre está inscripto en una de las piedras del monumento “Memoria sin Tiempo”. También se llaman “Eduardo Raúl Requena” una biblioteca y una calle de esa ciudad cordobesa.



Oscar Smith

Oscar Smith nació el 8 de enero de 1932 en Avellaneda, y desapareció el 11 de febrero de 1977. Durante fines de los años 60 y principios de la década del 70 ocupó la Secretaría Gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) desde donde logró conformar el convenio colectivo de trabajo para todos los trabajadores del sector en el país. En 1974 resultó electo secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal y participó de experiencias de autogestión en la empresa eléctrica nacional SEGBA. En abril de 1976, el gremio fue intervenido por el Ejército y hubo un despido masivo de delegados, junto con la derogación de las convenciones colectivas de trabajo. Luego de un importante conflicto gremial, fue secuestrado en Avellaneda en febrero de 1977. Su cuerpo fue identificado en 2011. Cada 11 de febrero el gremio de Luz y Fuerza le rinde homenaje.



Tomás Di Toffino

Tomás Di Toffino nació en 1939 y fue desaparecido en noviembre de 1976. Di Toffino fue un importante dirigente del gremio de Luz y Fuerza de Córdoba, fue dirigente estudiantil y luego empleado de la empresa de electricidad de Córdoba. Junto a Agustín Tosco fue figura central del sindicato, donde ocupó diversos cargos (paritario, subsecretario administrativo, secretario gremial y secretario adjunto). El “Cordobazo” lo contó entre los dirigentes más destacados, y sufrió la cárcel en los meses posteriores.



Luego de su secuestro, a fines de 1976, fue visto en el centro de clandestino de detención “La Perla”. A mediados de febrero de 1977, aseguran varios testimonios de sobrevivientes, lo llevaron a fusilar. Se responsabiliza de su muerte a Luciano Benjamín Menéndez y otros militares.

Jorge Di Pasquale

Jorge Di Pasquale nació en Buenos Aires en 1930 y fue secuestrado en diciembre de 1976. Comenzó su carrera sindical como delegado gremial de la Farmacia Franco-Argentina. Fue secretario general del gremio de empleados de Farmacia, a partir de 1957, y un dirigente histórico de la Resistencia Peronista. Fue delegado del general Perón ante los países socialistas, y uno de los fundadores del Movimiento Revolucionario Peronista. Fue diputado nacional electo en las elecciones anuladas de 1962. En ese año, participó en la elaboración del Programa de Huerta Grande.



Luego se destacó en la CGT de los Argentinos donde ocupó el cargo de secretario adjunto. Sufrió prisión en 1969. Fue dirigente del Peronismo de Base. Secuestrado en diciembre de 1976, sus restos fueron encontrados en 2011.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le brindó homenaje dándole su nombre a un pasaje peatonal ubicado en el barrio San Martín y al espacio verde ubicado entre las calles Lacarra, Dellepiane, Eva Perón y autopista Perito Moreno, de esa ciudad.

Marina Vilte

Marina Vilte nació en San Salvador de Jujuy en 1938 y fue secuestrada a fines de 1977. En 1956 se recibió de Maestra Normal Nacional. En los años 60 y 70, por tres períodos consecutivos, fue electa autoridad de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) de Jujuy.

En 1973 se produce la histórica unificación de los trabajadores de la educación en Huerta Grande y nace CTERA. Marina Vilte es elegida para integrar la Junta Ejecutiva. Mientras, sigue encabezando el gremio docente en Jujuy. El mismo 24 de marzo de 1976, día en que se produce el golpe de Estado, Marina cae presa por primera vez y es liberada. Permanece en Jujuy durante la dictadura y es secuestrada a fines de 1977.



Su nombre es el que lleva hoy el Instituto de Investigaciones Pedagógicas de CTERA. “Maestros del viento” es el nombre del video documental que realizó un grupo de militantes de la CTERA en memoria de Isauro Arancibia, Marina Vilte y Eduardo Requena.

Avelino Bazán

Avelino Bazán nació en 1930 en La Quiaca, Jujuy, y desapareció en octubre de 1978. Entre 1958 y 1970, ocupó tres veces el cargo de secretario general del Sindicato Obrero de Mina Aguilar. Fue, además, secretario general (1959) y secretario de Prensa y Propaganda (1961) de la Asociación Obrera de Minería Argentina (AOMA). En 1966, Bazán fue electo diputado provincial y presentó los proyectos de pavimentación de la Ruta N° 9 y de creación de la Universidad Nacional de Jujuy.



En 1973 fue designado ministro de Trabajo de Jujuy y en 1974 se desempeñó como secretario de Políticas Públicas.

Días antes del golpe militar de marzo de 1976, fue secuestrado y trasladado a la cárcel de Gorriti, en Jujuy, y luego a la Unidad 9, de la ciudad de La Plata. En junio de 1978 recuperó su libertad, pero el 26 de octubre de 1978, en pleno centro de la ciudad de Jujuy, fue secuestrado nuevamente. Aún continúa desaparecido.

El 26 de junio de 2007, la Cámara de Diputados de la Nación le rindió un homenaje a su trayectoria. En 2011, la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación reeditó el libro *El por qué de mi lucha*, escrito por Bazán en la cárcel de Gorriti.



Secretaría de Derechos Humanos
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación



archivo
nacional
de la memoria